

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó el PAI de Torre La Sal

Colectivos de afectados expusieron sus casos ante los europarlamentarios



La reunión con los diferentes grupos de afectados tuvo lugar junto al PAI de Torre La Sal

TORRE LA SAL
TOMAS TORRES

Afectados de programas urbanísticos procedentes de distintas localidades vecinas acudieron hasta Torre La Sal para exponer a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Vecinos de Alcossebre, Torre La Sal, Peñíscola (Pitxells), del PAI de Mundo Ilusión, entre otros presentaron ante los eurodiputados sus quejas y problemáticas, con todo lujo de detalles y explicaciones de cada uno de los casos particulares. La visita comenzó con horario peruano una hora y cuarto más tarde de la hora acordada, puesto que la comitiva iba realizando visitas a



Vecinos de Pitxells en Peñíscola también trajeron sus reivindicaciones ante la comisión

diferentes puntos de la provincia, cada cual con un tema de conflicto a cuenta del urbanismo. La expedición se dirigió a las obras del PAI de Torre La Sal, que desarrolla Marina d'Or, donde sobre el terreno les explicaron esta y otras problemáticas que afectan a estos vecinos. La delegación del Parlamento Europeo estaba encabezada por el Presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo,



Representantes de los colectivos de EU de Cabanes, Orpesa y Alcalá-Alcossebre acompañaron a los parlamentarios en su recorrido

Marcín Libicki y su vicepresidente, Michael Cashman.

Marcín Libicki en su encuentro con los afectados que en las múltiples reuniones que han mantenido se repiten los mismos problemas respecto a la ordenación del territorio, las indemnizaciones, las expropiaciones y el impacto ambiental de los proyectos urbanísticos.

Según los eurodiputados, la reunión mantenida con la Síndica de Greuges, Emilia Caballero Alvarez, resultó muy positiva, coincidiendo con el criterio de los parlamentarios respecto a que los ciudadanos en estos casos resultaban ser víctimas. Por ello instaron a los afectados a dirigirse a la oficina de la Síndica de Greuges para realizar sus quejas, por la buena impresión que les había transmitido en su encuentro.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Peticiones, Michael Cashman, se mostró en total acuerdo con las palabras de Libicki y señaló las recomendaciones hechas en la reunión mantenida con el Conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, relacionadas con el grado de cumplimiento del derecho europeo por parte de la Consellería a la hora de legislar.

Cashman se comprometió a investigar si existen violaciones de derechos fundamentales y al mismo tiempo trasladar las recomendaciones al Parlamento Europeo. El vicepresidente recordó que ya en la visita realizada por la Comisión de Peticiones en 2005 se generaron una serie de recomendaciones, que obtuvieron el respaldo de 550 parlamentarios de la eurocámara y tan solo 45 votos en contra. En dicho informe la Comisión

instaba al Gobierno valenciano a aceptar las recomendaciones propuestas e incluirlas en la redacción de la Ley Urbanística Valenciana, la conocida LUV. Cashman lamentó que el Gobierno Autonómico no las incluyera finalmente en el texto de la nueva Ley.

A pesar de ello, según los miembros de la comisión, la solución está en manos del Gobierno Autonómico, el cual es el responsable en este caso. Cashman manifestó su voluntad de

ser parte de la solución, por lo que están realizando esta serie de visitas "para ver con nuestros propios ojos lo que está ocurriendo". En dicha visita se están manteniendo reuniones con las autoridades locales y con los afectados por los diferentes programas urbanísticos.

A juicio de la Comisión de Peticiones, existen violaciones de los derechos de los ciudadanos y una falta de apoyo a los afectados por parte de las instituciones, por lo que les han querido transmitir a estos ciudadanos el apoyo de la Cámara Europea. El Vicepresidente Cashman indicó que la solución pasa por la intervención de los políticos locales, regionales y nacionales. Destacando asimismo la gran cantidad de proyectos presentados con la LRAU que se quieren aprobar, un hecho que aseguran que les ha confirmado la propia Síndica de Greuges.

Por contrapartida, Cashman ha reconocido que se mostraron muy sorprendidos por la respuesta obtenida por parte del Conseller González Pons, quien les ha dicho que esa apreciación son imaginaciones suyas.

El vicepresidente de la Comisión advirtió que si los políticos de aquí no son capaces de dar solución a estos problemas lo tendrán que hacer los tribunales europeos.

Por ello recomendó a los afectados que siguieran siempre un procedimiento en el cual es muy importante que hagan constar sus reclamaciones y alegaciones a los

González Pons califica de "gira pachanguera" la visita de los eurodiputados

El Conseller de Territorio y Vivienda destaca el "bajo nivel" de los eurodiputados y la "vaguedad" de sus propuestas

La respuesta a la visita de los miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el pasado 2 de marzo no se hizo esperar. Inmediatamente después de la reunión mantenida con los agentes económicos para conocer su opinión sobre la visita de los eurodiputados, el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, calificó de "gira pachanguera" y "tour turístico poco serio", "que supone una gran desconsideración hacia los valencianos" la visita de estos europarlamentarios a nuestra Comunidad.

El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, destacó el "bajo nivel" de los representantes del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo y la "vaguedad" de sus propuestas, "ya que en ningún caso han hecho referencia a casos concretos", tras la reunión mantenida con los representantes de la Comisión de Peticiones.

"No han presentado ningún dato nuevo", indicó González Pons, quien añadió que los eurodiputados se han limitado a "repetir tópicos y generalidades sobre quejas que nadie ha visto". En este sentido el conseller manifestaba su "gran decepción por una reunión en la que los representantes de la Comisión de Peticiones no han puesto sobre la mesa ni una sola denuncia".

Una visita "política" y "partidista"

La principal conclusión de este encuentro, subrayó el conseller de Territorio y Vivienda "es que la visita de los eurodiputados es

absolutamente partidista y política", y que "es todo menos una inspección de carácter técnico". "Se han referido a quejas que, como ellos mismos han reconocido, datan en su mayor parte del año 2003".

Según Pons, se trata de denuncias "que casi todas responden a la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), una norma jurídica que ha sido sustituida por la Ley Urbanística Valenciana, que corrige todos los errores y desviaciones de la anterior".

En este sentido, González Pons destacó su "profunda sorpresa" ya que todos los argumentos que esgrimen los eurodiputados se basan en la LRAU, "como si no se hubieran enterado de que en nuestra Comunidad se ha aprobado una norma jurídica, la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que corrige los excesos y errores de la LRAU y supone un modelo de urbanismo de calidad y sostenible".

González Pons manifestó su "convencimiento" de que los representantes del Comité de Peticiones de la UE que han visitado la Comunitat Valenciana "no se han leído la LUV", por lo que el conseller se ha comprometido a remitirles un ejemplar de la Ley Urbanística Valenciana en su idioma "para que tengan la información necesaria".

Para González Pons, "Se trata de una visita muy perjudicial y completamente injustificada" y por esta razón los sectores empresariales de la Comunitat Valenciana han dado su respaldo absoluto a la posición del Gobierno Valenciano". El conseller de Territorio y Vivienda



Representantes de las asociaciones de Ribamar y Marcolina expusieron sus inquietudes a los Europarlamentarios

proyectos ante el Gobierno Autonómico, enviando a su vez copias al Gobierno Central y a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. El siguiente paso sería ir a la justicia autonómica y nacional para defender sus reclamaciones, como cuestión previa a cualquier actuación.

Cashman consideró que el daño medioambiental es irreversible, pero en el aspecto del daño a las personas y las propiedades, en el caso de llegar a los tribunales europeos y en el caso de que fallaran a favor del reclamante, esto podría dar lugar a la imposición de importantes multas al Estado Español y por ende al Gobierno Autonómico "de millones y millones y millones de euros".

Al mismo tiempo, a preguntas de los afectados, Cashman manifestó que la existencia de un Plan General no lo convierte en legal.

afirmó que la Comunitat Valenciana "está siendo visitada por dos eurodiputados a la manera de Bienvenido Mister Marshall, cuando lo cierto es que cada visita de los representantes de la UE nos hace mucho daño", ya que "va seguida de la caída de ventas de los paquetes turísticos a nuestra Comunidad y de la venta de segundas residencias".

Asimismo, criticó que, "no hay precedentes en Europa de un agravio similar"; "nos visitan las mismas personas que en las dos ocasiones anteriores, cuyo destino son prácticamente los mismos municipios, casi todos ellos gobernados por el Partido Popular, y para investigar los efectos de una ley -la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)- ya derogada".

"No hemos visto a los inspectores en Cataluña, Andalucía, que es la región donde se ha producido el escándalo de Marbella, el sur de Francia, algunas zonas de Inglaterra o Polonia, donde, por ejemplo, un eurodiputado que nos visita puede informar sobre la compra-venta de terrenos en su país y otras zonas de Europa del Este", afirmó Esteban González Pons. Todo ello, "en los inicios de la temporada turística y en plena campaña electoral".

López-Istúriz pedirá una investigación en el parlamento europeo

El secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Istúriz, ha pedido disculpas a empresarios y sindicatos de la Comunitat Valenciana por el claro prejuicio que se está organizando con esta visita. Asimismo, ha anunciado que el Partido Popular Europeo va a pedir la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento de Europeo para averiguar el alcance de la visita y a qué intereses responde".